

Las elecciones en México: cómo sacar adelante un país dividido

Angel de la Vega Navarro*

Socios distantes, se podría decir de México y Canadá, parafraseando un libro publicado en los 80s. Ciertamente es que para este país, frente a la gravedad de los problemas del Medio Oriente, al irresistible ascenso de China o a las prioridades de la relación bilateral con Estados Unidos, México no se encuentra en el centro de sus preocupaciones. Sin embargo, tiene cierta importancia que un país de 105 millones de habitantes, que se encuentra entre las 12 más grandes economías del mundo (en términos de PIB), organice por segunda vez de manera consecutiva elecciones democráticas. A ello se agrega que se trata de un país que es socio de Canadá en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que ocupa un lugar importante de América Latina, a pesar de los distanciamientos ocurridos en años recientes.

Para interesarse en México no es preciso esperar que una nueva sublevación se produzca o que se desencadene una ola de asesinatos políticos, todo ello sazonado con una “crisis tequila”, como sucedió en 1994. Desde entonces, México parece ir hacia adelante, pero esa impresión podría resultar engañosa. El México democrático está lejos de una situación de prosperidad con perspectivas claras para su desarrollo. El crecimiento económico, impulsor del empleo y de una mejora en los ingresos de la población, sigue sin encontrar un sendero con tasas importantes y sostenidas. Mantener la estabilidad económica, como lo hizo el Presidente Fox, no

basta cuando un millón y medio de jóvenes llegan cada año al mercado de trabajo. Una moneda relativamente estable puede enorgullecer a algunos, pero China ya desbancó a México del segundo lugar dentro de los principales exportadores a Estados Unidos.

Los procesos electorales pueden ser momentos privilegiados para definir nuevas orientaciones con base en la confrontación democrática de proyectos y propuestas. Muchas veces, sin embargo, las campañas no cumplen ese objetivo y dan lugar a pugnas estériles que no permiten definiciones claras. No está claro aún si las recientes elecciones permitirán un nuevo dinamismo al país, de manera particular desde el punto de vista económico. De ellas no parecen emanar orientaciones claras en cuanto a los cambios que requiere un mejor desenvolvimiento de la actividad económica, apoyados en una clara mayoría.

Días antes de las elecciones, el 2 de julio, se preveía un resultado muy cerrado, de manera particular en cuanto a la presidencia de la república, y así lo confirmaron los votantes. El interés se centró en la presidencia, pero es necesario tener presente que, además del presidente, se elegía también a los 628 representantes que conforman la Cámara de Diputados y el Senado de la República, además de elecciones en varias entidades de la federación, tanto a nivel de los ejecutivos (gobernadores y presidentes municipales) como

* Profesor de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), primer titular de la cátedra sobre México contemporáneo en la Universidad de Montreal.

de las legislaturas locales.

En términos generales, los resultados entregan un país dividido, sin mayorías claras, ni para su conducción ejecutiva ni para la definición de los nuevos marcos institucionales y legales que requiere su desarrollo. Sin embargo, del proceso electoral resultan realidades interesantes: la coalición que apoyó a Andrés López Obrador (encabezada por el Partido de la Revolución Democrática –PRD), estuvo a un paso, según las cifras oficiales, de ganar la presidencia de la república, conserva el gobierno de la capital del país y emerge como la segunda fuerza política en el congreso (160 diputados de un total de 500 y 36 senadores de un total de 128).

Diez días antes de las elecciones, el candidato de la izquierda a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encontraba todavía en el primer lugar de las preferencias electorales, según varias encuestas. La impresión generalizada, sin embargo, era que la elección sería muy disputada, lo cual fue confirmado por los resultados proporcionados por el Instituto Federal Electoral (IFE): Felipe Calderón obtuvo 15 000 284 votos, es decir 35.89%; AMLO 14 756 350, es decir 35.31%. La diferencia entre los dos fue de solamente 243 934 votos, es decir 0.58 %. La caída del PRI, con su candidato Roberto Madrazo se ve plenamente confirmada: con 9 301 441 votos obtuvo solamente el 22.26%.

Éste último es otro de los resultados interesantes de estas elecciones. Para ponerlo en perspectiva, no tendría sentido recordar las cifras que obtenía el PRI cuando era una pieza fundamental del régimen autoritario que imperó durante una gran parte del siglo XX. Basta comparar el resultado que obtiene el PRI en esta elección presidencial con los que obtuvo cuando la sociedad mexicana logró que las elecciones empezaran a realizarse con mayor transparencia. En 1994, el PRI obtuvo 17 millones de votos con los cuales logró llevar a Ernesto Zedillo a la presidencia de la república y, en el año 2000 consiguió 13.5 millones ante Vicente Fox quien resultó ganador. En este 2006, como se dijo antes, obtuvo 9.3 millones.

Para la democracia mexicana, el que los electores dejen atrás al PRI es un buen signo. Seguramente algunos recuerdan los años de crecimiento y cierta prosperidad en algunos gobiernos de ese partido, pero también tienen

presente la ausencia de democracia y de libertades fundamentales que caracterizó al sistema político mexicano durante gran parte del siglo XX, sin olvidar las catástrofes económicas del último cuarto del pasado siglo: 1976, 1982, 1986, 1994. Fue una transición irresponsable entre dos gobiernos del PRI, el de Carlos Salinas y el de Ernesto Zedillo, la que, entre otros factores, sumió a la economía mexicana en la peor crisis que había conocido hasta entonces.

Al lado de esos aspectos interesantes, los resultados de las elecciones revelan también problemas. En las condiciones actuales, si Felipe Calderón resultara ganador, al final de un proceso que puede ser largo, habrá llegado a la presidencia el candidato menos votado en la historia reciente del país. En efecto, Calderón sería presidente con el voto de sólo uno de cada cinco electores registrados y sin haber conseguido el voto de cerca de dos tercios de los que fueron a las urnas. En la misma situación se encontrará AMLO, si es declarado vencedor.

Cualquiera que sea el caso, la incertidumbre subsistirá durante varias semanas. En el contexto de una elección tan cerrada, diversas irregularidades han hecho que el candidato que llega en segundo lugar (AMLO, con una diferencia de solamente 0.58%) impugne los resultados. No debe extrañar a nadie que esto se dé: las impugnaciones forman parte del proceso electoral.

En estas fechas, los partidos ya han presentado sus quejas e inconformidades. Según informaciones disponibles el PAN impugnó el 0.3% de las casillas (500 aproximadamente) y la Coalición encabezada por el PRD el 38% (cerca de 55 mil casillas). Ahora el TRIFE (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) deberá pronunciarse sobre todas ellas para declarar un ganador: dispone hasta el 31 de agosto para resolver las impugnaciones y hasta el 6 de septiembre para declarar presidente electo. Las felicitaciones, entre ellas las de los Srs. Harper y Bush a Felipe Calderón deberán esperar y quizás verse revisadas. Lo que se sabe hasta ahora es que ese tribunal ya ha anulado elecciones para gobernadores en estados de la federación.

AMLO ha asegurado que se mantendrá sus impugnaciones dentro del marco legal, pero llamando al mismo tiempo a la población a movilizarse y a manifestarse. El sábado 8 de

julio, en una manifestación masiva que llenó el Zócalo y calles aledañas, AMLO aseguró que esas movilizaciones “se llevarán a cabo haciendo uso de nuestras garantías individuales sin afectar derechos de terceros. No queremos afectar a los ciudadanos. No se trata de cerrar carreteras”. Responsabilizó al presidente Vicente Fox y al Instituto Federal Electoral de haber intervenido para que las elecciones fueran una simulación. Por ello, desde su perspectiva, es necesario impugnarlas para no permitir un retroceso democrático: “si les permitimos que se impongan mediante el fraude va a ser una regresión, por eso molesta la actitud de Vicente Fox, que llega a la Presidencia gracias a los avances democráticos, y cuando está en el poder, se convierte en un traidor a la democracia”.

Si bien se esperaba una elección cerrada, no se preveía un período prolongado de incertidumbre. Por una parte, los electores demostraron una enorme madurez democrática, ya que no solamente aseguraron una participación elevada de 58.9 % (sobre un total de 71.5 millones de electores), sino además lo hicieron en calma, sin incidentes violentos. Fue una jornada, además, en la que miles de ciudadanos encargados de la realización de la elección actuaron de manera ejemplar (en México no son organismos gubernamentales los que llevan a cabo el proceso de elección). Se esperaba también que una institución como el IFE asegurara de manera eficiente la transparencia y la certidumbre en la contabilidad de los votos y en la información sobre los resultados. Desgraciadamente esto no sucedió así.

El IFE pudo proporcionar los resultados del cómputo que todo mundo esperaba, hasta la madrugada del jueves 6 de julio, después de cuatro largos días de incertidumbre. El mismo día de las elecciones, el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), que debería ser un instrumento de transparencia y certidumbre, no fue utilizado correctamente y dio lugar a sospechas de manipulación para favorecer a Felipe Calderón, el candidato del partido del presidente Fox (PAN). Ahora se sabe que, en efecto, hubo irregularidades y que los funcionarios del IFE no informaron correctamente sobre « inconsistencias » en las actas de las casillas electorales, las cuales hicieran que no se tomaran en cuenta 2.5 millones de votos en los resultados preliminares. A pesar de haber computado el 98.45% de las

130 488 casillas instaladas, el PREP no permitió, según el Presidente del IFE, dar a conocer al término de la jornada electoral una tendencia irreversible en la contabilidad de los votos. El domingo por la noche anunció que habría que esperar hasta el miércoles 5, fecha en la que se iniciaría el cómputo de la totalidad de las actas en cada uno de los trescientos distritos electorales. Esas irregularidades y otras descubiertas cuando se dio el cómputo final del IFE abrieron la vía para que AMLO rehusara reconocer la victoria de Felipe Calderón y exigiera un cómputo complementario “urna por urna, boleta por boleta, acta por acta”. Tiene al derecho de su lado y a una parte de la opinión pública nacional e internacional, sobre todo cuando estuvieron presentes otros factores que pudieron también influir el resultado de las elecciones: el apoyo abierto del presidente al candidato de su partido, la utilización electorera de programas federales de asistencia social, los excesos de la campaña de guerra sucia en contra de AMLO, el apoyo de empresas, como una filial de Pepsico y el Grupo Jumex, en violación de la ley electoral (solamente los partidos pueden contratar anuncios en radio y televisión para promoción electoral). Se pondría así en evidencia no solamente que hubo irregularidades, sino que la contienda electoral fue profundamente desigual e inequitativa.

De todo esto probablemente lo que más indigna - y que se pensaba había quedado atrás como una de las marcas registradas del PRI- es la utilización de programas federales para asistir a los sectores más pobres de la población (Oportunidades, Seguro Popular, crédito a la vivienda) con fines clientelistas y de inducción del voto. Todos los partidos recurren a ellos, pero benefician sobre todo al que se encuentra en el gobierno federal. Al día siguiente de las elecciones el periódico *Reforma* informó, con base en una encuesta, que 41% de los electores que se beneficiaron de “Oportunidades” votaron por Felipe Calderón, 29% por López Obrador y 26% por Madrazo.

Al mejorar los niveles de ingreso y de educación de la población muchos de los vicios que aún persisten seguramente tenderán a desaparecer. Pero es importante ponerlos en evidencia, sobre todo después de que estas elecciones dieron lugar a un resultado tan

cerrado. Probablemente no se llegará a revertir los resultados anunciados por el órgano electoral, pero cuando menos la sociedad mexicana estará mejor informada y ello contribuirá a un mejor desarrollo democrático.

Al impugnar los resultados de la elección presidencial, AMLO puede no solamente contribuir a una mayor legitimidad del resultado final, sino también al establecimiento de líneas de diálogo y negociación para hacer avanzar la solución de los problemas fundamentales del país. Incluso si se presentan algunas turbulencias con algunos períodos de inestabilidad, eso es preferible a una presidencia teñida de ilegitimidad y que deberá enfrentar no solamente la frustración de una parte importante de los electores sino el reto de hacer funcionar un gobierno que no dispondrá de una mayoría ni en la cámara de diputados ni en el senado de la república. De la manera como Calderón tomará en cuenta algunas aspiraciones que se expresaron durante las campañas y establecerá relaciones con otras fuerzas políticas dependerá la suerte de su presidencia, en caso de ser confirmado. El país no soportaría otro bloqueo como el que tuvo que enfrentar Fox, en parte a causa de su ineptitud política. Por ahora, Calderón, conciente de su ventaja muy limitada que le otorgó el IFE, habla de un gobierno de coalición y muestra cierta apertura llamando a otras fuerzas a formar parte de su gabinete. Lo peor sería que recurriera solamente a miembros del PRI, el partido que acaba de sufrir el rechazo de los electores. Fox, por ejemplo, confió la política monetaria y financiera al equipo que la condujo en los últimos tres gobiernos del PRI. El balance no es brillante: estabilidad sin crecimiento ni reformas.

Para Calderón el problema no es sencillo. Por un lado se presentó como el candidato de la continuidad y en esa calidad su victoria (no confirmada) ha sido saludada por grupos de poder económico y personalidades, tanto nacionales como extranjeras. Es visto por ellos como el candidato de la estabilidad y de las políticas de corte empresarial, « orientadas por el mercado » y que pretenden que México se conecte mejor con los procesos de la globalización productiva y financiera. El problema para él será responder a las expectativas de cambios que conduzcan al crecimiento y al empleo. No lo logrará solamente agregando responsabilidad a la gestión de Fox (su eslogan durante la campaña fue « continuidad responsable »). Deberá avanzar en las propuestas y los acuerdos. Su campaña no augura cosas

buenas en ese sentido: en lugar de hacer propuestas, desarrolló una campaña negativa, de guerra sucia, dirigida a despertar los temores de los electores. Su rival de izquierda y las fuerzas que lo apoyaron fueron presentados como un peligro para el país, impulsores de un populismo irresponsable, amigos de todos los Chávez y Evos Morales de América del Sur, listo para enfrentarse a Estados Unidos. En los días finales de la campaña, el candidato del PAN logró incluso que el poderoso Consejo Coordinador Empresarial interviniera directamente de manera alarmista, al insistir sobre el grave peligro que para México representaba el romper con las políticas que se han aplicado desde los últimos sexenios del PRI y continuadas por Fox.

Populismo es una palabra aplicada por la derecha conservadora a candidatos que buscan un apoyo popular privilegiando a los grupos más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad o que buscan alternativas a políticas que no han traído el crecimiento en América Latina. No se trata de alternativas radicales que se situarían en la perspectiva de un cambio de sistema, sino de un cambio de prioridades. “Por el bien de todos, primero los pobres”, repetía AMLO durante su campaña a lo largo y a lo ancho del país, un llamado que análisis recientes de instituciones como el Banco Mundial podrían hacer suyos. Cerca de la mitad de los Mexicanos viven en la pobreza y si la situación mejoró un poco estos últimos años, las cifras continúan siendo impresionantes: la pobreza pasó de 54% a 47% de la población y la pobreza extrema de 24% a 17%. En esa reducción han incidido algunos programas gubernamentales, así como las divisas que los emigrantes hacen llegar a sus familias: estos ingresos se encuentran en un nivel similar al de los provenientes de las exportaciones de petróleo y del turismo.

La pobreza deja muy mal parado al país en un mundo en el cual el conocimiento, el capital humano, la productividad son los motores del crecimiento. Niveles tan elevados de pobreza y desigualdad, no solamente son el caldo de cultivo de tensiones y conflictos, sino que son perjudiciales también para el progreso económico. En ese campo la teoría económica ha realizado una transformación notable: la desigualdad extrema es vista ahora como una situación dañina para el crecimiento. No solamente degrada varios indicadores sociales, sino también los que evalúan el desempeño de las economías (productividad, competitividad,

...), sobre todo cuando, como es el caso de México, se trata de una de las economías más abiertas del mundo en el plano comercial y financiero. Millones de Mexicanos han sufrido directamente los efectos de esos retrasos y han continuado emigrando masivamente, a pesar de las dificultades extremas que deben enfrentar.

Un período como el que se avecina, de aquí al 6 de septiembre, cuando el TRIFE deberá confirmar al ganador de la elección presidencial, y luego hasta el 1 de diciembre cuando deberá tomar posesión, es una ocasión única para lograr acuerdos acerca de los cambios necesarios en los marcos institucionales y reglamentarios dentro de los cuales se desenvuelve la actividad económica. Es necesario agrupar esos cambios en reformas coherentes que hasta el momento no han podido ser articuladas: trabajo, energía, seguro social. Otras más no han avanzado: « la reforma del Estado », del sistema de justicia, particularmente importante cuando reina la impunidad y se ha expandido el tráfico de drogas y la acción de grupos con intereses poderosos que pueden incluso imponerse a las instituciones del Estado.

Cierto es que la presidencia ya no es en México aquella “monarquía sexenal” de la época del PRI, pero aún dispone de poderes, incluso en el campo económico. En un sistema en el que la separación de poderes comienza a funcionar realmente, el presidente puede ser un jefe de orquesta capaz de articular proyectos para someterlos a un congreso en donde se expresarán inevitablemente diferentes opiniones e intereses.

Cualquiera que llegue a la presidencia va a encontrar dificultades, como la de no disponer de mayoría en el congreso. También se enfrentará a márgenes estrechos para hacer cambios en la política macroeconómica. Sin embargo, habrá que encontrar los espacios, no solamente en el plano del pensamiento, sino también de las políticas públicas. Uno de esos campos en los cuales se pueden encontrar espacios, es el de una nueva articulación de temas ya conocidos, como el fiscal y el de la política petrolera. El porcentaje de los ingresos fiscales totales dentro del PIB es sumamente bajo en México (12%) y dentro de esos ingresos los correspondientes al petróleo han llegado en años recientes a ocupar más de la tercera parte. Esas cifras no corresponden a un país moderno con una economía relativamente diversificada. Deben cambiar rápidamente para hacer frente a las

inversiones indispensables en capital humano (educación, salud, investigación) e infraestructuras como las de transportes y comunicaciones. Si la situación actual lleva a México a revisar su política de exportaciones petroleras, necesariamente deberá replantear su política fiscal, de manera más sofisticada que como lo intentó el presidente Fox al pretender gravar a los alimentos y medicinas. En algún momento se deberá eliminar privilegios fiscales a ciertas empresas, como hacen los Estados modernos y luchar contra la enorme evasión fiscal.

Pero hablar de ciertas medidas que parecerían de sentido común en otras latitudes, escandalizan tratándose de un país como México al cual se le pide únicamente instaurar las mejores condiciones fiscales para que entre y salga la inversión extranjera y tengan confianza los mercados. La retórica de un candidato como Felipe Calderón y los compromisos contraídos le dificultarán la tarea. Esperemos que cualquiera que sea confirmado esté a la altura de una nueva presidencia, capaz de proponer, de negociar, de llegar a consensos. Una nueva desilusión pesará fuertemente en el futuro del país y puede dar lugar a la búsqueda de propuestas y movimientos más radicales.

Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cette publication demeurent l'entière responsabilité de l'auteur-e et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Observatoire des Amériques ou des membres du Centre Études internationales et Mondialisation (CEIM).